



El movimiento sindical e indígena de Ecuador de la década de 1980: Entre la injusticia redistributiva y la injusticia de reconocimiento

fatru_94@hotmail.com

Antonio Trujillo Rivadeneira¹
Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas-FIAAM

Resumen

El presente artículo tiene el objetivo profundizar en la investigación del intrincado proceso de protesta social ocurrido en Ecuador durante la década de 1980 según el análisis de la acción política y las reivindicaciones de redistribución del movimiento sindical, su relación con el Estado y su paulatina crisis, al igual que las reivindicaciones de reconocimiento del movimiento indígena y su crecimiento exponencial en el escenario político de esta época. La hipótesis de la investigación es que las políticas neoliberales de los gobiernos de la década de 1980 incidieron en una reconfiguración del escenario de contienda política donde las demandas de identidad se superpusieron a las de redistribución de los movimientos sociales.

Palabras Clave

Neoliberalismo - Justicia Social - Movimiento Sindical - Movimiento Indígena - Reconocimiento

¹ Director de Proyectos de la Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas-FIAAM (Ecuador). Máster en Historia Contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona. Becario del 'Programa Internacional de Postgrado' de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación-SENACYT (Ecuador).



The Trade Union and Indigenous Movement of Ecuador in the 1980s: Between Redistributive Injustice and Recognition Injustice

fatru_94@hotmail.com

Antonio Trujillo Rivadeneira
Fundación de Investigaciones Andino Amazónicas-FIAAM

Abstract

This article aims to deepen in the investigation of the intricate process of social protest that occurred in Ecuador during the 1980s according to the analysis of political action and the demands for redistribution of the unions, its relationship with the State and its gradual crisis, as well as the demands for recognition of the indigenous movement and its exponential growth in the political scene. The hypothesis of the research is that the neoliberal policies of the governments of the 1980s influenced a reconfiguration of the scene of political conflict where identity demands were superimposed on those of redistribution due to the adverse effects of neoliberal policies imposed by the State.

Key Words

Neoliberalism - Social Justice - Union Movement - Indigenous Movement - Recognition

Introducción

Durante la década de 1980 presidieron la administración del Estado ecuatoriano cuatro presidentes y sus gabinetes, los cuatro, fueron objetivo de críticas por parte de los movimientos sociales del país por sus políticas neoliberales, abiertas a la tendencia regional de liberalizar mercados y reducir la inversión estatal buscando austeridad antes que igualdad y redistribución económica. Con la implementación del neoliberalismo, las desigualdades socioeconómicas se agudizaron, afectando severamente a la subsistencia de la clase popular y trabajadora, representada mayoritariamente por obreros y campesinos, dos actores fundamentales para comprender los procesos de contienda que transformaron el escenario político del Ecuador contemporáneo.

Al aplicarse el modelo neoliberal, claramente contrario a atender los problemas sociales de los sectores populares, los sindicatos y las organizaciones indígenas utilizaron herramientas de resistencia, como la huelga, para defender sus derechos. Las características de sus reclamos, especialmente su relación con los problemas laborales e identitarios, constituirán el principal tema de análisis de esta investigación.

Para este trabajo el ámbito cronológico mantiene una especial relevancia, ya que durante los once primeros años del retorno a la democracia liberal en el país (1979-1990) se aplicó con toda fuerza la doctrina neoliberal, con la finalidad de reformar el Estado para volver funcionales sus 'obesas' y 'obsoletas' instituciones, que bajo los regímenes militares (1972-1979) se habían tornado, según el criterio de los tecnócratas neoliberales, poco funcionales y, más que nada, costosas. Según estos argumentos se respaldaron a toda costa las medidas de 'ajuste estructural', término utilizado para definir a las políticas de recorte presupuestario del sector público, que implicaron el paulatino inicio de una ola de privatizaciones, según una lógica empresarial de administración estatal. Las políticas privatizadoras llegaron a afectar a instituciones vitales para la reproducción social, como la educación, la salud pública y el sistema de seguridad social.

El artículo se encuentra dividido en tres apartados. El primer apartado tiene el objetivo de definir los conceptos teóricos transversales que serán utilizados como herramientas para la comprensión del contexto histórico y los procesos de movilización social indígena y sindical. El segundo apartado busca introducir al lector

al contexto socioeconómico de las décadas de 1970 y 1980 para comprender el efecto de las medidas de ajuste estructural en la sociedad ecuatoriana. Finalmente, el tercer apartado tiene la intención de explicar la pugna entre el Estado y los movimientos sindical e indígena, enfocándose en los cambios discursivos y prácticos que sufrieron tales movimientos populares como consecuencia de las políticas de Estado neoliberales.

Aspectos teóricos y metodológicos de la investigación

En esta primera parte del artículo se explicarán los principales conceptos que serán utilizados como herramientas para la comprensión de las demandas de los movimientos sociales ecuatorianos. Los dos primeros, provienen de las ramas de la filosofía moral y la teoría social, y son de autoría de la filósofa estadounidense Nancy Fraser. Me refiero a los denominados paradigmas de injusticia redistributiva e injusticia de reconocimiento, que Fraser define como paradigmas que asumen concepciones diferentes de las colectividades que sufren injusticias². En el paradigma de redistribución:

“Los sujetos colectivos de injusticia son clases o colectividades similares a las clases, que se definen económicamente por una relación característica con el mercado o los medios de producción. El caso clásico es el paradigma marxiano es la clase trabajadora explotada, cuyos miembros deben vender su fuerza de trabajo con el fin de recibir los medios de subsistencia”³.

Mientras que en el paradigma de reconocimiento:

“Las víctimas de la injusticia se parecen más a los grupos de status weberianos que a las clases sociales marxianas. Definidas por las relaciones de reconocimiento y no de redistribución, se distinguen por el respeto, estima y prestigio de menor entidad que disfrutaban. El caso clásico del paradigma weberiano es el grupo étnico de bajo estatus, al que los patrones de valor cultural dominantes señalan como diferente y menos valioso, en perjuicio de

² Fraser, Nancy, “La justicia social en la era de la política de identidad: Redistribución, reconocimiento y participación”, en Fraser, Nancy y Honneth, Alex, eds., *¿Redistribución o reconocimiento?* Ediciones Morata, S.L, Madrid, 2006, 23.

³ Fraser, Nancy, “La justicia social en la era de la política de identidad”, 23.

la posición social de los miembros del grupo y de sus oportunidades de ganar estima social"⁴.

Es común que en el ámbito tanto práctico como intelectual estos dos tipos de reivindicaciones aparezcan disgregadas; por lo tanto, dentro de los movimientos sociales, el activismo que considera la redistribución como el remedio de la dominación se encuentra cada vez más disociado de las luchas que buscan la igualdad de género, y por otro lado, algunos proponentes del reconocimiento desdeñan la política de redistribución, citando el fracaso del igualitarismo económico que tiende a prescindir de las diferencias de las minorías; se considera así a la política distributiva como un materialismo pasado de moda e incapaz de cuestionar las experiencias clave de injusticia⁵.

Sin embargo, la tesis de Fraser asume que los dos tipos de injusticias, a pesar de sus diferencias, se encuentran entrelazadas y responden en el actual mundo globalizado a un mismo gran conjunto de injusticias sociales que afectan a grupos vulnerados por múltiples formas de discriminación consecuencia de las asimetrías sociales todavía mantenidas en pie por las estructuras estatales, sociales y culturales⁶. Este artículo tiene como objetivo utilizar la teoría de Fraser para analizar el discurso y los conflictos de los movimientos sindical e indígena del Ecuador durante la década de 1980, con la finalidad de construir un marco conceptual y una narrativa histórica acorde al discurso, el conflicto y las demandas políticas, económicas y sociales de tales organizaciones.

Por otro lado, para obtener una mejor comprensión del contexto y las relaciones políticas entre los diferentes actores sociales que participaron en el conflicto, se utilizará como referencia el concepto de contienda política atribuido a los sociólogos Charles Tilly, Sidney Tarrow y Doug MacAdam, quienes lo definen como:

"La interacción episódica, pública y colectiva entre los reivindicadores y sus objetos cuando: (a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o parte de las reivindicaciones, y (b) las

⁴ Fraser, Nancy, "La justicia social en la era de la política de identidad", 24.

⁵ Fraser, Nancy, "La justicia social en la era de la política de identidad", 18.

⁶ Fraser, Nancy, "La justicia social en la era de la política de identidad", 31.

reivindicaciones, caso de ser satisfechas, afectarían los intereses de al menos uno de los reivindicadores"⁷.

El artículo, por lo tanto, se acopla a un marco de análisis estructural, que busca comprender los problemas de injusticia social que impulsan a la organización y acción política de los movimientos sociales según la relación de estos grupos con el Estado, el cual es considerado como un actor fundamental para comprender la razón del recrudecimiento de las injusticias, especialmente redistributivas, en el Ecuador de 1980.

Antecedentes económicos: la llegada del neoliberalismo al Ecuador

La segunda parte del artículo tiene el objetivo de explicar la transición del modelo económico desarrollista al neoliberal y sus consecuencias para la sociedad ecuatoriana. En un primer momento, el desarrollismo militar de la década de 1970 apostó por un modelo proteccionista de la economía del país, de una trayectoria importante en la región latinoamericana promovida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). El modelo de planificación estatal 'desarrollista' se respaldaba en la extracción petrolera y, en menor medida, en la agroexportación, aspectos que en conjunto construyeron una economía dependiente del devenir de los mercados internacionales y del financiamiento externo, pero que al fin y al cabo también generaron crecimiento económico sostenido, mejoras en la infraestructura del país y una serie de cambios sociodemográficos que reformularon la vida urbana, construyendo relaciones sociales cada vez más influenciadas por el crecimiento de las ciudades modernas.

El economista Francisco García menciona que el PIB ecuatoriano creció una media anual del 8,8% durante la década de 1970, valor que, cabe destacar, era superior a la media latinoamericana. También durante esta época el Ecuador experimentó un auge demográfico, el cual se situaba en el 5,7% de media anual, a diferencia del 1,5% que el país había conseguido entre las décadas de 1950 a 1970⁸.

⁷ Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, y Macadam Doug, *Dinámica de la contienda política*, Editorial Hacer, Barcelona, 2000, 5.

⁸ García Pascual, Francisco, "¿De la década perdida a la otra década perdida? El impacto del ajuste estructural en el Ecuador y en América Latina, 1980-2002", en Francisco García y Víctor Bretón, eds., *Estado, Etnicidad y movimientos sociales en América Latina*, Icaria Editorial, Barcelona, 2003, 68.

La década de 1970, por lo tanto, representó para el Ecuador un período de crecimiento económico y demográfico nunca antes experimentado, acompañado por una considerable inversión en infraestructura e industria, y procesos de migración interna del campo a la ciudad. Ecuador deja de ser así, de manera dramática, un país rural y tradicional y se ve abocado a una urbanización acelerada. Este conjunto de fenómenos sociales y económicos implicaron también el impulso de modificaciones de las relaciones sociales, reflejadas en la incorporación de la mujer a las labores productivas, la masificación de la televisión, las modificaciones en los patrones de comportamiento familiar, entre otros elementos⁹.

Sin embargo, en un país como Ecuador, donde el crecimiento económico fue inequitativo, el crecimiento demográfico superó la productividad y la capacidad de exportación del país, por lo que el gobierno militar optó por financiar el presupuesto estatal con deuda expedida por los organismos multilaterales de crédito y, especialmente, por el gobierno de los Estados Unidos¹⁰.

A pesar de las grandes expectativas del gobierno militar nacionalista, el auge 'desarrollista' fue meramente coyuntural, ya que la crisis energética mundial estancó las economías de centro, por lo que sus efectos no tardaron en llegar al Ecuador plasmados en la alza del precio del petróleo que se desató entre los años 1979-1981. También, el gobierno había acumulado una importante cantidad de deuda externa; las cifras de deuda rondaban el 15% del PIB en el año 1970, es decir, 242 millones de dólares, y ya el 40% del PIB en 1980, lo que representaba la cantidad de 4.652 millones de dólares¹¹.

Los problemas económicos estructurales que afectaron al Ecuador de los setenta se deben también, como menciona Carvajal, a que reestructurar el aparato productivo en los centros requería una alta centralización de los capitales para su financiamiento. Esta medida implicó un acelerado retorno de las inversiones, que en la década de 1970 se habían dispersado hacia las periferias disfrazadas como ofertas crediticias, lo que significó menos créditos para financiar el desarrollo de economías como la ecuatoriana, desatando una elevación sin precedentes de las tasas de interés de la deuda externa. Para el caso ecuatoriano, el pago 'por conceptos de

⁹ Barrera, Augusto, *Acción colectiva y crisis política, el movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa*, CEDIME, Quito, 2001, 87.

¹⁰ García Pascual, Francisco, "¿De la década perdida a la otra década perdida?", 70.

¹¹ Ibid.

capital e intereses' de la deuda desde 1980 hasta 2008 fue de 75.908,2 millones de dólares; en el mismo lapso recibió 65.878,8 millones, por lo que se generó una transferencia neta negativa de 10.299,4 millones. Este fenómeno explica la debilidad de la economía ecuatoriana y su dependencia de los capitales extranjeros sujetos a las fluctuaciones de la economía mundial y al devenir de los problemas geopolíticos del momento¹².

Para 'solucionar' los problemas económicos urgentes fueron impulsadas recetas económicas neoliberales, con la intención de buscar una salida ortodoxa al endeudamiento masivo, siguiendo pautas de ajuste estructural de la economía, alineando las políticas-económicas de Estado con intereses mercantiles y privados, tanto locales como internacionales. Entre las medidas sugeridas por el FMI se encontraba, por ejemplo, la idea de disminuir el tamaño del Estado y limitar las operaciones financieras del gobierno central y entidades autónomas, restringiendo al mínimo el gasto público¹³, propuesta que, cabe decir, fue acatada a pesar de sus evidentes efectos negativos para la sociedad, construyendo un patrón de ajuste inequitativo que fue extremadamente conflictivo y autoritario.

En concreto, el intento de recortar el presupuesto del sector público defendía la suposición que un Estado 'máximo' era ingobernable, por lo que era necesario tomar medidas urgentes para 'aligerar' el aparato estatal, según la suposición de que este se tornaría ágil y eficaz al reducir sus funciones. El sociólogo Lorenzo Córdova Vianelo menciona que en Latinoamérica esta teoría pretendió negar el papel que el Estado debía jugar como mediador de las injusticias sociales y económicas, rompiendo con un acuerdo que planteaba un modelo de Estado social pactado no solo con la élites, sino también con las demás clases sociales del país¹⁴. Las medidas neoliberales, por lo tanto, crearon un Estado que transformó su fin último, dejando de representar la figura de 'mediador para conseguir equidad social' y en adelante resguardando, ante todo, los intereses privados de los grupos de poder.

Según cifras expuestas en el trabajo de García, el PIB ecuatoriano ascendió solo a un 2,1% en el período 1981-1990, lo que implicó un crecimiento positivo, pero

¹² Carvajal, Fernando, "Ecuador: la evolución de su economía", en Luna Tamayo, Milton y Bonilla, Adrián, eds., *Estado del País, Informe Cero, Ecuador 1950-2010*, Estado del País, Quito, 2010, 100.

¹³ Banco Central del Ecuador, *Cartas de Intención suscritas por el gobierno del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional*, Banco Central del Ecuador, Quito, 1983, 35.

¹⁴ Córdova Vianelo, Lorenzo, "Liberalismo, Democracia, Neoliberalismo, ingobernabilidad", *Revista Mexicana de Sociología*, México D.F., n.4, vol. 58, 1999, 29.

muy por debajo del 8,8% de media anual del período 1970-1980 y que no logró sostenerse en equidad con el PIB per cápita, que en el mismo período registró con una baja del -0,2%. Las consecuencias de la caída del PIB se vieron reflejadas de forma clara en el detrimento del nivel de vida de los estratos medios y bajos, ya que la trayectoria de la economía ecuatoriana demuestra que durante la década de 1980 los índices de pobreza se dispararon; según menciona el autor, la pobreza en las áreas urbanas pasa de un 24% durante el inicio de la década de 1980 a casi un 50% durante el inicio de la década de 1990; de igual manera, en el mundo rural aumenta del 49% durante el primer período al 76% durante el segundo. Estas cifras demuestran que la pobreza se duplicó durante la década de 1980¹⁵.

La transición del modelo económico desarrollista al neoliberal tuvo profundas implicaciones socioeconómicas en Ecuador, especialmente si tomamos en cuenta que los efectos de las medidas neoliberales debilitaron al mercado interno y a la producción nacional, favoreciendo la vinculación de la economía del país a los mercados externos, generando así un fuerte nexo local-global que restringió la intervención del Estado en los conflictos políticos, especialmente laborales, que afectaban a sectores de la sociedad civil organizada¹⁶. En la tercera parte de la investigación se explicará el conflicto forjado por las medidas de reforma y recorte neoliberal, analizando las políticas de reforma estatal y su influencia en los discursos y la acción política de los movimientos sociales ecuatorianos, representados en esta investigación por organizaciones sindicales e indígenas.

Los gobiernos de Roldós y Hurtado como primer espacio de contienda

Tras la renuncia del general Guillermo Rodríguez Lara en el año de 1976 el proyecto político de la dictadura cambia y el 'Triunvirato militar' que lo reemplaza propone un nuevo horizonte político, más atractivo para los medios de información y la creciente población urbana, que tenía como objetivo el regreso al modelo de gobierno democrático. El plan de transición fue aprobado en el mes de enero de 1978, cuando el gobierno llevó a cabo un referéndum donde una nueva constitución fue votada por aproximadamente 1.812.000 ciudadanos letrados¹⁷. Al culminar el proceso constitucional, se celebraron elecciones en el mes de julio de 1978, donde el

¹⁵ García Pascual, Francisco, "¿De la década perdida a la otra década perdida?", 74.

¹⁶ Carvajal, Fernando, "Ecuador: la evolución de su economía", 101.

¹⁷ *Diario El Comercio*, 17 de julio de 1978, 1.

binomio de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado demostró poseer ventaja sobre los demás candidatos, primacía concretada en su triunfo durante una segunda vuelta electoral celebrada en abril de 1979, diez meses después¹⁸.

Jaime Roldós inició su gobierno con una alta popularidad por su crítica al autoritarismo militar, representando un cambio generacional dentro de la lista de políticos que mantenían el apoyo partidario y electoral. Su discurso, con características progresistas, apelaba tanto a la unidad y la división de poderes como a la formación de un Estado moderado¹⁹, propuestas que recogían las demandas de una clase media urbana cada vez más numerosa que reflejaba el cambio sociodemográfico radical que el país experimentó.

Sin embargo, junto con la defensa discursiva del liberalismo, los grupos empresariales, influenciados por el relativo éxito económico de la dictadura de Pinochet en Chile, presionaron para aplicar las recetas neoliberales en Ecuador. La presión empresarial, junto con la prematura muerte de Roldós en un accidente aéreo en el año de 1981, representó el fin de un proceso político alrededor del cual se formó el débil consenso de la transición a la democracia, que pronto sufrió una ruptura, especialmente con los grupos sindicales y campesinos.

Tras la muerte de Roldós, el gobierno, encabezado por su vicepresidente Osvaldo Hurtado, intensificó la aplicación de políticas de ajuste estructural sin poseer una figura carismática que pudiera continuar sosteniendo los acuerdos que fueron pactados con las organizaciones políticas de la sociedad civil. La subordinación del Estado a las recetas económicas del FMI desde ese momento fue más evidente y funcionó como catalizador para la protesta de los movimientos sociales. Por ejemplo, las huelgas nacionales conducidas por el Frente Unitario de Trabajadores se desarrollaron con fuerza, ante todo, por el efecto negativo en la economía interna de las medidas de ajuste propuestas por el gobierno, que comprendían el centro de las recetas de 'estabilización económica', es decir: el alza de combustible y del costo del transporte, la ambigua política de aumentos salariales, la reducción del gasto público y la eliminación de subsidios agrícolas²⁰.

¹⁸ *Diario EL Comercio*, 30 de abril de 1979, 5.

¹⁹ Roldós, Jaime, "Mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano", en Saad H, Pedro, ed., *25 años de democracia en Ecuador*, Editorial EL CONEJO, Quito, 2005, 1.

²⁰ Ycaza, Patricio, *Historia del Movimiento Obrero ecuatoriano*, CEDIME, Quito, 1991, 275.

El investigador Leonardo Espinoza menciona que durante 1982 las presiones de la banca internacional fueron percibidas con más claridad por la sociedad ecuatoriana, ya que el gobierno de Hurtado, siguiendo los intereses del capital multinacional, impulsó claramente una política económica que resguardó los intereses de las multilaterales de crédito, transfiriendo los efectos de la crisis económica a los trabajadores. Tal impopular decisión desató una gran cantidad de conflictos laborales y manifestaciones obreras, problema que finalmente instigó a convocar una nueva huelga nacional²¹.

En este marco, el alza del precio de la gasolina y los pasajes de transporte público fueron los principales elementos que definieron, en concreto, la convocatoria del FUT a una huelga nacional el 21 de octubre de 1982; se exigía en el manifiesto sindical la derogatoria del incremento de los precios del combustible, amenazando con establecer un paro indefinido si no se cumplían las demandas obreras. Cabe mencionar que esta movilización fue la más importante del movimiento sindical durante toda la década de 1980, ya que levantó a trabajadores tanto de la ciudad como del campo, protestando unidos contra las medidas gubernamentales. Para Jorge Dávila Loor, *"los obreros se tomaron las fábricas y los campesinos las carreteras, los indígenas campesinos incluso llegaron a ocupar espacios de mayor tamaño e importancia como cantones en la Sierra centro, elevando el alcance y la importancia de la huelga"*²².

Espinosa agrega que este Paro Nacional del Pueblo impulsó un decreto de estado de emergencia y la consecuente captura de tres mil personas en todo el Ecuador. Sin embargo, el ejército no logró controlar la protesta, generándose así, según el autor, el más alto nivel de participación y combatividad que hasta la época se había conocido en una huelga nacional²³.

Según el médico e investigador Augusto Barrera, durante este período es posible identificar momentos de activación, auge y reflujo de las organizaciones populares, además de la volatilidad de sus alianzas con el Estado. Así, si la huelga del FUT de 1981 representó el apoyo político a Roldós en su pugna en contra de la

²¹ Espinosa, Leonardo, "Ensayo preliminar sobre el imperialismo, oligarquismo y sindicalismo para la elaboración de la historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano", *Revista IDIS*, Cuenca, n.16, 1986, 73.

²² Loor Dávila, Jorge, *El FUT, trayectoria y perspectivas*, Corporación Editora Nacional, Quito, 1995, 70.

²³ Espinosa, Leonardo, "Ensayo preliminar sobre el imperialismo, oligarquismo y sindicalismo", 75.

oposición del órgano legislativo, las huelgas de 1982 y 1983 representaron la ruptura total con el régimen de Hurtado y el inicio de un período de resistencia sindical²⁴.

Las convocatorias a huelga del FUT durante este período de gobierno demuestran que las estrategias de movilización lideradas por el sindicalismo fueron dirigidas a frenar medidas gubernamentales que agudizaron las injusticias redistributivas afectando la subsistencia de los sectores populares del país. En este marco, las organizaciones sociales que participaron en la pugna en contra de las medidas de ajuste implantadas por el gobierno de Hurtado tenían como finalidad la reivindicación y defensa de un coste de vida justo, necesidad claramente ligada con las demandas de la clase trabajadora y el reclamo por justicia social y redistribución económica²⁵.

A pesar de su fuerza, las demandas sindicales fueron relevantes durante este período porque dentro de la dinámica social y política del país, el proyecto ideológico neoliberal todavía se encontraba en fase inicial y, al parecer, no había afectado directamente a las políticas laborales ejecutadas por el Estado, aspecto central para comprender el avance y la profundización del ajuste estructural. Así lo demuestra la agenda del gobierno de Hurtado, que incorporó en su planificación estatal la mediación de conflictos laborales como un paliativo ante los recortes. El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), la principal cartera de Estado dedicada a planificar las políticas públicas, afirmaba que:

“La implementación de la política social ha de originar cambios cualitativos de la sociedad y del Estado ecuatoriano y el mejoramiento efectivo en los próximos 5 años, de la situación ocupacional y del nivel de ingreso de la población (...) En cuanto a la organización laboral, se observará total y absoluto respeto a las asociaciones laborales, representadas, especialmente, por las Centrales Sindicales con las que se establecerá un diálogo constante (...) La relación de diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y autoridades laborales, será permanentemente utilizada, tanto para programar el desarrollo laboral, como para evitar o dar solución a los problemas que se presenten”²⁶.

²⁴ Barrera, Augusto, “Acción colectiva y crisis política”, 97.

²⁵ Fraser, Nancy, “La justicia social en la era de la política de identidad”.

²⁶ Consejo Nacional de Desarrollo, *Plan Nacional de Desarrollo del gobierno democrático, 1980-1984*, CONADE, Quito, 1980, 43.

Este discurso conciliador, plasmado en el informe del CONADE, que buscaba mediar entre los requerimientos empresariales y las demandas sindicales, fue consecuencia de la ejecución de una planificación política que continuó apostando por un modelo de administración gubernamental donde los sindicatos todavía mantenían una relación corporativa con el Estado; relación que, aunque debilitada, funcionaba como un posible contrapeso a las propuestas empresariales de flexibilización laboral. Sin embargo, gestándose bajo esta coyuntura, las reformas neoliberales más profundas no tardaron en ser aplicadas, notándose un mayor deterioro de la relación Estado-sindicatos durante los próximos gobiernos de esta década.

Resumiendo, podemos notar que el espacio de contienda de este primer período lo protagonizó el movimiento sindical representado por el FUT, organización que presidió las huelgas populares del país con la finalidad de demandar cambios sustanciales que difirieran de la nueva política económica neoliberal, la cual amenazaba con profundizar las injusticias socioeconómicas mediante acciones antipopulares como el alza del combustible, que tuvo como efecto el aumento del coste de vida, especialmente de la clase trabajadora urbana y de los sectores populares campesinos. El gobierno, en este momento de contienda, cumple el papel de antagonista, a pesar de que la planificación económica y política que propone esté dirigida a buscar consenso sobre las relaciones laborales entre sindicatos y empresas. Las medidas económicas asumidas por la administración de Hurtado crearon un espacio donde la ortodoxia neoliberal comienza a ganar fuerza e importancia para la planificación de las políticas económicas del Estado ecuatoriano, problema que agudizó progresivamente las injusticias de carácter redistributivo que sufría la clase trabajadora del país.

El gobierno de León Febres Cordero como segundo espacio de contienda

León Febres Cordero gana las elecciones en el año de 1984 y establece un gobierno de derecha que fortalece la concentración de ingresos para los estratos más pudientes de la sociedad. A pesar del creciente malestar popular, Febres Cordero optó por profundizar la brecha económica y social existente entre las élites empresariales y la afectada clase media y baja de forma radical y autoritaria. Dentro del imaginario popular, su gobierno no sólo fue conocido por profundizar las políticas

de recorte, sino también por ejercer una cruda violencia de Estado que afectó directamente a los movimientos sociales defensores de los derechos laborales y de clase.

Como era de esperar tras su elección, las alianzas políticas de la administración de Febres Cordero fueron vinculadas directamente con el sector empresarial y, por lo tanto, con sus intereses. Barrera menciona que la base discursiva de este gobierno combinaba un "*principio de unidad de acción*" con los empresarios en un sentido instrumental y pragmático, resultando en un discurso maniqueo y autoritario al enfrentarse con el malestar popular, especialmente con los problemas laborales²⁷. Durante su gobierno el Consejo Nacional de Desarrollo planifica la política económica del Estado, pero esta vez en beneficio unilateral del sector empresarial, sugiriendo ideas como: "*(1) fomentar la ocupación a tiempo parcial, (2) fortalecer e impulsar la formación de empresas asociativas y micro empresas de producción de insumos de bienes y servicios, y (3) orientar la migración externa y utilizarla adecuadamente*"²⁸.

Las demandas del sector empresarial se encontraron, por lo tanto, incluidas en el discurso estatal sobre lo laboral, ya que, como lo demuestran los documentos analizados, sus intereses políticos fueron incluidos en los estudios y las sugerencias del CONADE. En el informe del año 1986 se menciona que:

*"Con el propósito de establecer en qué medida las empresas estarían en condiciones de ocupar mano de obra semicalificada, a tiempo parcial (como complemento de su formación educativa), e identificación de oportunidades de empleo, capacitación e incorporación de la mano de obra al proceso productivo, el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos aplicó una encuesta a 909 empresas, con 43, 786 trabajadores ocupados, de todos los sectores económicos, en las provincias en las que se cuenta con oficinas de colocaciones: Carchi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Loja, Esmeraldas, Manabí, Guayas y el Oro"*²⁹.

El afán del gobierno por impulsar la formación de empresas asociativas y microempresas de insumos y de bienes y servicios es señal de un quiebre con las

²⁷ Barrera, Augusto, "Acción colectiva y crisis política", 102.

²⁸ Consejo Nacional de Desarrollo, *Informe del presidente del Consejo Nacional de Desarrollo al H. Congreso Nacional*, CONADE, Quito, 1986, 103.

²⁹ Consejo Nacional de Desarrollo, *Informe del presidente del Consejo Nacional de Desarrollo al H. Congreso Nacional*, CONADE, Quito, 1985, 100.

políticas de fomento laboral tradicionales, en el sentido que separa al trabajador de la relación obrero-patrón, proponiendo como alternativa el estímulo a relaciones *freelance* de trabajo, alejando al Estado de las demandas de los trabajadores, entre las cuales se encontraban una optimización de los salarios y un proceso de contratación de mano de obra donde se respetasen derechos básicos como las ocho horas de trabajo diarias y las remuneraciones acorde a la realidad económica del país.

En este sentido, también es posible percibir el interés del Estado por fomentar la posibilidad de ocupación de mano de obra semicualificada y a tiempo parcial para las empresas, sugerencias que responden a una clara institucionalización de la marginación económica del trabajador. Parece claro que durante el 'febrescorderismo' el Estado buscaba promover de forma directa una reestructuración de la división del trabajo en favor de los intereses empresariales, aprovechando el momento desfavorable de la economía nacional. Más allá, la encuesta del CONADE muestra como parte angular de su argumentación, que las principales preocupaciones del sector empresarial eran el temor a la actividad sindical, además de la desconfianza por el impacto de las alzas salariales y a las crecientes complejidades de la relación obrero-patrón³⁰.

Para mediados de la década de 1980, la presión por aplicar las nuevas medidas de flexibilización laboral inició una ruptura del protagonismo de los sindicatos en el escenario político del país. Este fenómeno podría explicarse únicamente como consecuencia de los problemas internos del sector sindical, pero va más allá y se relaciona con cambios en materia política que experimentó el país durante la década de 1980 y, especialmente, durante el gobierno neoliberal de Febres Cordero. El debilitamiento del sector sindical tuvo relación directa con la profundización de la doctrina neoliberal, ya que como menciona el sociólogo Juan Pablo Pérez Sáinz, el orden neoliberal estimuló en Ecuador y Latinoamérica una transformación en la naturaleza de la ciudadanía social de los sectores populares, que tras haberse constituido como trabajadores con derechos laborales bajo un sistema de seguridad social estatal fuerte durante el periodo desarrollista, fueron después transformados durante el orden neoliberal en sujetos 'pobres', convirtiéndose en el objetivo de políticas sociales focalizadas a contener los problemas de subsistencia del círculo

³⁰ Consejo Nacional de Desarrollo, "Informe del presidente del Consejo Nacional de Desarrollo", 104.

privado familiar antes que incentivar la organización corporativa de los trabajadores bajo el manto de la defensa de los derechos laborales³¹.

Utilizando la violencia de Estado el gobierno profundizó en las políticas de ajuste estructural; sin embargo, como menciona el investigador Lucas Achig, su interés no se encontraba únicamente en el control del poder económico, sino también buscaba dominar el poder político, reprimiendo a toda forma de oposición relevante autoprotomando mantener deberes por encima de su mandato constitucional. En este marco, su estrategia de dominación se basó en intentar orientar la atención y opinión ciudadana a los problemas relacionados con la pugna de poderes exclusivos del sistema político, profundizando a la par la desarticulación de la protesta y el recrudecimiento de la crisis económica que afectaba a los sectores populares³².

Por lo tanto, el carácter represivo del gobierno afectó directamente a las convocatorias de huelga del FUT y representó, a diferencia del gobierno de Hurtado, un obstáculo concreto para la socialización de la protesta. La violencia estatal en contra de los manifestantes implicó que durante la huelga pactada por el FUT para el 25 de marzo de 1987 los enfrentamientos con la fuerza pública resultaran en medidas arbitrarias como el arresto de dirigentes sindicales en la ciudad de Guayaquil, y la clausura de algunas radios en Quito por manifestarse a favor de la huelga. Cabe mencionar que las medidas represivas se generaban bajo un amparo legal e institucional. Los orígenes jurídicos de la violencia ejercida por el gobierno en contra de la acción colectiva popular se escudaban en la denominada 'ley de seguridad nacional', la cual facilitaba el control represivo de la protesta y fue de notable utilidad para Febres Cordero y su gabinete, abiertamente autoritario³³.

Por lo tanto, el ejercicio administrativo del 'febrescorderismo' se caracterizó por la permanente transgresión de las normas constitucionales en materia de derechos humanos, las detenciones arbitrarias, las incomunicaciones prolongadas, el empleo de la tortura, de agresiones físicas y psicológicas, y la censura de medios de comunicación opositores³⁴. De esta manera, la profundización de las medidas de

³¹ Pérez Sáinz, Juan Pablo, *Mercados y bárbaros, la persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina*, FLACSO, Costa Rica, 2014, 436.

³² Achig, Lucas, "La Reconstrucción Nacional' y el Movimiento Obrero Ecuatoriano: Ensayo de la coyuntura para la elaboración de la Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano", *Revista IDIS*, Cuenca, n.16, 1986, 91.

³³ Looz Dávila, Jorge, "El FUT, trayectoria y perspectivas", 105.

³⁴ Ycaza, Patricio, "Historia del Movimiento Obrero ecuatoriano", 293.

ajuste estructural y la deslegitimación del sindicalismo en el país se vincularon a un entorno político violento.

Sin embargo, junto con la crisis económica y la progresiva deslegitimación del movimiento sindical, se abre espacio para un creciente protagonismo de las organizaciones indígenas en el espacio de protesta. Ycaza menciona que a la huelga nacional preventiva convocada por el FUT en el mes de enero de 1985 se sumaron ante el ojo público organizaciones como la Coordinación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador³⁵. La CONACINE, fundada en el año de 1980, fue uno de los primeros intentos de unidad nacional del movimiento indígena. Para el antropólogo Mark Becker, el discurso de esta organización se constituyó según el postulado de “una sola organización Nacional para las diversas nacionalidades indígenas del país”, que además buscaba construir una “doble dimensión de lucha”, basada en el reconocer tanto el carácter clasista como el identitario en su discurso y acción política³⁶.

Cabe mencionar que los pueblos indígenas ecuatorianos han mantenido una potente historia de organización y movilización social, ejemplo de ello son figuras históricas como Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, las cuales participaron activamente en procesos de organización, movilización y defensa de los derechos campesinos en la Sierra norte ecuatoriana, siendo las dos parte de uno de los más importantes sindicatos rurales del siglo veinte, la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), fundada en 1944, conocida por exigir una redistribución de tierra justa para el campesinado y por ser un ejemplo de lucha para las organizaciones indígenas y campesinas de la década de 1980³⁷.

Becker acota que para el movimiento indígena de la década de 1980 las demandas de carácter étnico lograron comprometer y movilizar las bases; sin embargo, tuvieron menos éxito para mantener en pie el ímpetu organizativo y la coherencia a largo plazo de sus miembros, acción que se pensaba solo se podía lograr si conseguían combinar tanto elementos de clase como de identidad. Tal combinación resultó complicada de alcanzar, problema que generó tensiones y

³⁵ Ycaza, Patricio, “Historia del Movimiento Obrero ecuatoriano”, 288-289.

³⁶ Becker, Marc, *¡Pachakutik! Movimientos indígenas, proyectos políticos y disputas electorales en el Ecuador*, FLACSO-Ecuador y Abya-Yala Ediciones, Quito, 2015, 10-11.

³⁷ Rodas, Raquel, *Dolores Cacuango, pionera en la lucha por los derechos indígenas*, Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas, Quito, 2007, 70.

diferencias ideológicas entre las organizaciones amazónicas y las organizaciones serranas, finalmente ganando protagonismo las demandas étnicas ante las de clase³⁸.

En este segundo escenario de contienda podemos observar una clara reconfiguración de la acción política estatal dirigida hacia la consolidación de los intereses económicos empresariales y en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores formales. Las decisiones político-económicas del gobierno de Febres Cordero deslegitimaron al FUT, que además de combatir en contra de una agenda neoliberal consolidada fue víctima de una fuerte violencia estatal que desconfiguró su plataforma de lucha. Por otro lado, el movimiento indígena tomó fuerza en el escenario de contienda al intentar abarcar tanto las demandas regionales de redistribución (de la Sierra) como de reconocimiento (de la Amazonía). El movimiento indígena parecía ser, siguiendo las pautas de Fraser, un movimiento que por sus intenciones políticas lograba conjugar la lucha tanto en contra de las injusticias redistributivas como de las de reconocimiento, que en teoría se entrelazan, especialmente si son vinculadas con actores sociales como los indígenas, que sufren tanto discriminaciones de estatus (racismo) como desigualdades económicas (pobreza). Sin embargo, como se ha argumentado, en las deliberaciones internas de la organización se superpuso las demandas étnicas ante las de clase, generando así una subordinación de los reclamos clasistas ante los etnicistas.

El gobierno de Rodrigo Borja como tercer espacio de contienda

Cuando Rodrigo Borja ganó las elecciones en 1988 la 'deuda social' con los movimientos populares se explicitó en la retórica del Estado; sin embargo, se reconocieron como urgentes las demandas culturales e identitarias, dejando en un segundo plano los problemas económicos y laborales, que continuaron bajo la lógica de ajuste estructural. Según Barrera, desde la perspectiva jurídico-institucional el gobierno de Borja profundizó la puesta al día en las reformas neoliberales, aprobando leyes como la de Reforma Arancelaria, de Régimen Tributario, y de Operación de Maquila³⁹.

Bajo el nuevo ambiente político, el gobierno de Borja apostó por el impulso de políticas de reforma cultural; el informe del CONADE de 1989 sugiere que: "*para*

³⁸ Becker, Marc, "¡Pachakutik!", 10-11.

³⁹ Barrera, Augusto, "Acción colectiva y crisis política", 106.

atender el fortalecimiento de la identidad nacional, el plan de desarrollo contempla atender, en la medida de lo posible, las demandas que desde las exigencias de identidad, provienen de los trabajadores, de las nacionalidades indígenas y en general desde los sectores populares⁴⁰. Este argumento se acerca más a una línea discursiva que compone un horizonte reivindicativo según una reevaluación ascendente de las identidades no respetadas y los productos culturales de los grupos difamados, lo que Fraser entiende como un reconocimiento y valorización positiva de la diversidad cultural⁴¹. Siguiendo con la idea, en el informe se acuerda que:

“En relación con el problema de falta de reconocimiento del carácter multinacional y pluricultural del país, el gobierno ha visto necesario atender las necesidades de la población indígena del país desde una perspectiva integral que reconozca los derechos políticos, culturales y de legalización de tenencia de tierra que permanentemente les han sido negados (...) de la misma manera, en reconocimiento del derecho que asiste a estos pueblos a tener educación que revalorice sus propias lenguas y culturas posibilitando una mejor comunicación inter-cultural, se creó en el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural Bilingüe, encargada de generalizar este tipo de educación en todo el país, en coparticipación directa en la gestión y toma de decisiones con las organizaciones indígenas”⁴².

A pesar de existir elementos redistributivos en el informe, como la intención de legalizar la tenencia de tierra para los campesinos indígenas, el CONADE dirige la planificación de la política social del país acorde a postulados ligados con el paradigma de reconocimiento, que examina nuevos horizontes de diálogo y accionar estatal con los movimientos populares dirigidos a combatir injusticias de estatus. En este contexto, la importancia del movimiento indígena continuó creciendo, posicionándose como el principal protagonista del desarrollo de la movilización social del país. Este fenómeno se notó con más fuerza el 10 de junio de 1990, cuando se realizó el primer levantamiento indígena masivo de la historia del Ecuador contemporáneo, que llegó a tener un gran impacto en la opinión pública y el escenario político. Los cuestionamientos indígenas durante este suceso fueron dirigidos a problemas como el carácter racista de la sociedad, la lucha por la tierra y

⁴⁰ Consejo Nacional de Desarrollo, “Informe del presidente del Consejo Nacional de Desarrollo”, 120-121.

⁴¹ Fraser, Nancy, “La justicia social en la era de la política de identidad”, 87.

⁴² Consejo Nacional de Desarrollo, *Informe del presidente del Consejo Nacional de Desarrollo al H. Congreso Nacional*, CONADE, Quito, 1988, 123.

la defensa de los derechos humanos básicos de las diversas nacionalidades indígenas del país⁴³.

La histórica explotación de los pueblos indígenas fue el catalizador de este importante levantamiento, especialmente si tomamos en cuenta que los levantamientos indígenas se enmarcan en cientos de años de lucha en contra del sistema de dominación perpetuada primero por las élites coloniales y luego por las élites republicanas, y que cabe recalcar, es todavía un problema que se encuentra presente. Por lo tanto, la herencia anticolonial de la lucha indígena fue una fuerte base para el desarrollo e impacto de esta gran movilización; como menciona el antropólogo Segundo Moreno Yáñez, los movimientos subversivos indígenas desde la antigüedad han sido perjudicados por el 'triple despojo' de sus tierras, esfuerzo humano y demás riquezas, problema que ha provocado una larga historia de enfrentamientos en contra de las instituciones de dominación⁴⁴.

El levantamiento de 1990, por lo tanto, es ejemplo de las nuevas alternativas, basadas en luchas históricas que los movimientos sociales en Ecuador forjaron para reafirmar sus demandas políticas, económicas, sociales y culturales, en ese momento legitimadas por un nuevo discurso de reconocimiento cultural, fortalecido por el movimiento indígena bajo el liderazgo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), organización sucesora de la CONACINE.

La fortaleza del discurso y la acción política indígena se manifestó, ante todo, en los profundos cuestionamientos a la estructura uni-nacional del Estado, dando paso a un debate vinculado a la problemática étnico-nacional y la imposición de la denominada 'cultura dominante' sobre la diversa y compleja sociedad ecuatoriana. Similar a los demás países latinoamericanos, Ecuador construyó su comunidad nacional basándose, como menciona el antropólogo Héctor Díaz Polanco, en un proyecto etnocéntrico centralizado y excluyente que cerraba la participación libre en asuntos locales, regionales o nacionales a grupos de población, como las diversas nacionalidades indígenas ecuatorianas, que mantienen identidades diferenciadas, contrastadas con la 'igualdad formal' de todos los miembros de la comunidad nacional. Tal diferenciación creó históricamente una 'desigualdad real' entre grupos socioculturales indígenas y otros sectores de la sociedad que actúan y se comportan

⁴³ Ycaza, Patricio, "Historia del Movimiento Obrero ecuatoriano", 305.

⁴⁴ Moreno-Yáñez, Segundo, *Sublevaciones indígenas en la Audiencia de Quito, desde comienzo del siglo XVII hasta la Colonia*, Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador y Corporación Editora Nacional, Quito, 2014, 288.

como una coalición opresora ante los primeros, negando y rechazando las diferencias culturales y lingüísticas de las minorías en pro de una homogeneidad que privilegia, hasta la actualidad, un patrón sociocultural blanco-mestizo y de 'unidad nacional'⁴⁵.

Por lo tanto, el movimiento indígena en la administración de Borja promovió una plataforma de confrontamiento que priorizaba el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del Ecuador, exigiendo el reconocimiento de sus diversas lenguas y el reconocimiento del país como una nación 'plurinacional y pluricultural'. En este contexto, Nina Pacari, una de las principales líderes indígenas del momento mencionaba:

*"Hablar de una sola nación, una sola cultura, un solo idioma, es hablar de un concepto occidental de nación. Eso no se adapta con la realidad ecuatoriana. Pienso que no debemos encerrarnos en los conceptos. En Ecuador hay varios idiomas, hay una historia anterior a la de 1492 y no hay una sola cultura. Hay que cambiar el concepto. Creemos en la necesidad de reconceptualizar el término de nación y en ese sentido los pueblos indígenas lo hemos enriquecido, hemos aportado para que se entienda que la unidad está en la diversidad"*⁴⁶.

El discurso indígena representado por la voz de Pacari antagonizaba directamente con uno de los preceptos fundacionales del Ecuador: su carácter 'uninacional' basado en un idioma común, el castellano, y un territorio concretamente delimitado. A pesar de que ciertas demandas de reconocimiento fueron incluidas en los informes del CONADE, la propuesta 'plurinacional' fue considerada como radical por las figuras políticas activas del momento, demostrando que el Estado no solo utilizaba las luchas de reconocimiento como anzuelo para la negociación de pactos coyunturales, sino que los planteamientos centrales del movimiento indígena no apelaban en ningún sentido a las oligarquías gobernantes, como lo demuestra la declaración de Jaime Nebot, uno de los principales líderes políticos del país:

"Yo no creo que el concepto de Nación es distinto al concepto de Estado, pero el concepto de Estado se basa en el concepto de Nación y si creemos que los indígenas son ecuatorianos, con nuestros mismos derechos, con

⁴⁵ Díaz-Polanco, Héctor, *Etnia, nación y política*, Juan Pablos Editor, México, 1987, 14.

⁴⁶ Líder indígena Nina Pacari, Milagros Aguirre (entrevistadora), Quito, Ecuador, año 2000.

*distintas costumbres, pero con nuestros mismos derechos y obligaciones, yo no creo que aquí podemos hablar de plurinacionalidad. Yo sé que es un tema a debatir y que de parte y parte hay argumentos importantes. Es mi opinión que no, yo creo que nosotros somos una sola nación, somos la nación ecuatoriana y tiene una forma jurídica a través del Estado ecuatoriano; ahora, evidentemente, hay una tradición y una costumbre indígena, de ecuatorianos de una misma nación que está allí, que tiene una representación y que yo creo que debe ser representada. El incorporar a los indígenas, a la sociedad moderna, no tiene nada que ver con irrespetar su tradición y sus costumbres, yo creo que se puede hacer perfectamente bien, definitivamente*⁴⁷.

Nebot apeló en la entrevista a entender al Estado como una entidad homogeneizadora, modernizante y tutelar, bajo la cual la ciudadanía se concede por un factor universal y no particular, tolerando las expresiones culturales específicas sin que estas definan las bases del Estado-Nación ni su discurso social. Las demandas indígenas representaron, por lo tanto, un choque directo el discurso del *establishment* ecuatoriano, al que Nebot representaba. Así, por su carácter radical, el discurso indígena abrió un espacio de debate y crítica que llegó a cuestionar aspectos imbricados en las bases mismas de la organización social y la versión histórica de construcción nacional de las élites. Esta estrategia sirvió para que la CONAIE lograra reimpulsar la plataforma de lucha de los movimientos sociales e intensificar las demandas populares y del alcance e importancia de la movilización social en el país. Pacari menciona:

“El concepto de plurinacionalidad no lo quita nada a la cohesión nacional, al contrario, la fortalece. Tenemos que asumir la necesidad de ciertas cohesiones para que la realidad sea la que prime. La participación⁴⁸ de los pueblo Shuar y Achuar, desde su territorio y desde su identidad es una prueba, es una reafirmación de la necesidad de reconocernos como un Estado plurinacional (...) La manera en que se ha planteado el problema a la comunidad internacional y ante el Perú para defender el territorio, es decir, enarbolando la presencia ancestral de los pueblos Shuar y Achuar en esas áreas, es ya reconocer a esas naciones. Si los indígenas somos incluso fundamento para la

⁴⁷ Político Jaime Nebot, Erwin Frank, Ninfa Patiño y Martha Rodríguez (entrevistadores), Quito, Ecuador, año 1992.

⁴⁸ Nota: se refiere a la Guerra del CENEPA, contra el PERÚ, desarrollada en durante el año de 1995.

defensa de ese territorio es hora de que a nivel interno del país se den salidas como el de reconocimiento de un Estado plurinacional"⁴⁹.

Pacari utiliza en su discurso postulados básicos de unidad nacional (la defensa del territorio ecuatoriano ante la guerra), pero a la vez vincula sus argumentos al debate sobre la territorialidad indígena y la importancia que las nacionalidades Shuar y Achuar mantuvieron en el desarrollo de la guerra contra el Perú. La estrategia indígena entonces medió entre el particularismo de las reivindicaciones étnicas y el no negar, por otro lado, la abstracción que implica identificarse como ecuatoriano/a; su finalidad estuvo en buscar romper con las bases homogenizantes del proyecto nacional blanco-mestizo, protestando por la defensa de la diversidad cultural y, junto con ello, también la diversidad de reivindicaciones y reclamos de los movimientos políticos populares.

Otras lideresas, como Blanca Chancoso, hacen referencia al concepto de plurinacionalidad al igual que Pacari, posicionándolo como un término fundamental para la lucha indígena:

"Hay un momento de confrontación que todavía no se está superando se esperaría superar o sea hemos ganado un espacio de autoridad con identidad propia a nivel indígena, un espacio de opinión política en los momentos porque la lucha por la tierra no se ha acabado, pero hemos dado un paso, la educación no se ha acabado, unas leyes hemos avanzado pero hay un punto fundamental donde todo todos estos años todavía no logramos y creo que es importante de buscarla, es que el convencimiento de los sectores no indígenas con relación a los indígenas, el convencimiento de.. bueno no sé si decir convencimiento y aceptación dentro de este proceso, porque hay una admiración sí, algo innegable pero ya como parte del ejercicio de la plurinacionalidad, es decir de convivir juntamente para la fortaleza, no, no, no se está acudiendo, porque no hay ese convencimiento, todavía queda en el yo, es que son los indios, imposible acepar que los indios puedan estar adelante y que nosotros podamos seguir, es un poco así todavía hay esa cosa adentro, el momento en que eso se quite hasta en los aliados yo creo que ahí vamos a poder tener una cosa real, pero ahí no sólo va a ser la fuerza de los indígenas sino que ahí va a ser la fuerza de todos, pero como se quita todavía eso,

⁴⁹ Líder indígena Nina Pacari, Milagros Aguirre (entrevistadora), Quito, Ecuador, año 2000.

entonces estamos aún todavía re lejos, queremos ir juntos pero estamos todavía así como muy paralelos”⁵⁰.

Chancoso se refiere a la plurinacionalidad como un proyecto en construcción precedido por una sociedad integrada no sólo por las bases de su movimiento, sino también por la población mestiza, montubia y afro-ecuatoriana. Esta idea se torna fundamental para entender la acción política del movimiento indígena, ya que discursivamente se aleja de los particularismos y se intenta posicionar como una opción englobante, ideal que según Chancoso no se ha logrado conseguir por la falta de convencimiento de la población no indígena del proyecto plurinacional, pero que, cabe recalcar, siempre fue complicado de alcanzar inclusive dentro de las mismas bases de los movimientos sociales ecuatorianos, marcados por discursos particularistas, tanto de clase como identitarios. Podemos notar que la visión de Chancoso coincide con el discurso de Pacari en cuanto a la importancia de la universalidad del concepto de plurinacionalidad, recordando que la lucha indígena tiene, en teoría, un sentido incluyente y que pretende abrir un espacio para ampliar y contener las demandas de los movimientos sociales en general.

La contienda política en este tercer escenario visibiliza un intento del Estado de buscar consenso con los movimientos sociales, reconociendo la necesidad de crear políticas culturales que reivindiquen ciertas demandas de reconocimiento indígena, como la educación bilingüe, acción que sin embargo no detuvo las medidas de flexibilización laboral, parte fundamental del programa de ajuste estructural neoliberal, exponiendo así la intención del Estado de instrumentalizar las demandas de los movimientos sociales para alejarlas del problema laboral-redistributivo, redirigiendo la contienda hacia problemas identitarios de reconocimiento. A pesar de las objeciones de ciertas élites políticas a las demandas más radicales del movimiento indígena, los reclamos de la COIANIE fueron efectivos y, por lo tanto, primero, lograron consolidar su objetivo principal: declarar al Ecuador como un país pluricultural y multiétnico (concretado en la Constitución de 1998), y segundo, aglutinaron dentro de sus reivindicaciones a otras demandas sociales, como las reivindicaciones por derechos redistributivos o como la lucha por la tierra; sin embargo, tales demandas se encontraron subordinadas a la agenda de reconocimiento cultural y, por lo tanto, perdieron protagonismo en el escenario de contienda.

⁵⁰ Líder indígena Blanca Chancoso, Fernando García (Entrevistador) Quito, Ecuador, año 2003.

Conclusiones

La década de 1980 en Ecuador implicó un cambio trascendental en la relación sociedad civil-Estado, en el manejo de la economía del país y, también, en los preceptos político-ideológicos que constituyeron el espacio de contienda y negociación. La radicalidad del cambio se puede vislumbrar en las diferencias abismales que existieron entre el proyecto político 'desarrollista' de carácter cepalino, gestado en la misma región, y la nueva doctrina neoliberal proveniente de la teoría económica de Milton Friedman y la Escuela de Chicago de los Estados Unidos. Es más, las cifras cuantitativas demuestran el impacto negativo del ajuste neoliberal, que en términos de costo social resultó desastroso, afincando a la mitad de la población en el umbral de la pobreza, arruinando la calidad de los servicios públicos y deslegitimando, mediante un poderoso discurso y un demoledor uso de sus herramientas políticas, a las organizaciones sindicales y, en general, a los organismos que tenían la finalidad de defender al obrero y al artesano antes que al mercado.

Analizando el contexto político, social y económico adverso de la década de 1980, esta investigación profundizó en la comprensión de la transformación discursiva y organizativa de los movimientos sociales ecuatorianos, que se examinó según los paradigmas de justicia social de redistribución y reconocimiento. En este ámbito, Fraser menciona que existe una proliferación de las luchas por reconocimiento en el escenario político contemporáneo, ya que impulsan muchos de los conflictos sociales del mundo, desde las batallas en torno al multiculturalismo hasta las luchas relativas al género y la sexualidad. Por otro lado, se torna evidente la decadencia de la política de clase ya que el lenguaje de la igualdad económica dejó de mantener la importancia que se le atribuyó en la época de la Guerra Fría, fenómeno que se puede identificar en las demandas de los movimientos sociales, ya los reclamos por el reparto equitativo de los recursos y de la riqueza se encuentran cada vez más relegados, y a pesar de que no han desaparecido por completo, su influencia ha disminuido mucho⁵¹.

Se demostró así que durante los gobiernos de Roldós, Hurtado, Febres Cordero y Borja existió, efectivamente, un cambio de los paradigmas de justicia social dentro del escenario de negociación y contienda y de las interacciones entre los movimientos sociales y el Estado. Esto se debió también a que los gobiernos

⁵¹ Fraser, Nancy, "La justicia social en la era de la política de identidad", 85.

neoliberales, al desgastar las instituciones y sistemas de protección social y deslegitimar la figura y la importancia de los trabajadores como sujetos políticamente activos y capaces de negociar sus intereses, consiguieron evidentemente desarticular al movimiento sindical, que sufrió una crisis irrevocable y dejó de representar a la sociedad civil organizada.

La hecatombe neoliberal reformuló el espacio político para que el movimiento indígena, que había tomado fuerza por el quiebre definitivo de las estructuras sociales gamonales en el campo y por la constitución de nuevas organizaciones políticas indígenas tanto en la región Sierra como en la región Amazónica, surgiese como el principal referente de los movimientos sociales en el país. La fortaleza y alcance del movimiento indígena se vio reflejada en el levantamiento de 1990, ejemplo de organización y contienda que abrió paso a una nueva década de movilizaciones sociales basadas, principalmente, en luchas por reconocimiento. Sin embargo, es importante mencionar que los levantamientos indígenas han sido expresiones de resistencia fraguadas desde la época colonial por consecuencia de las grandes asimetrías sociales, culturales y económicas que grupos sociales vulnerados experimentan hasta la actualidad.

Finalmente, cabe mencionar que aunque también se disputaban reivindicaciones de 'clase' ligadas a la problemática de la redistribución, fueron los reclamos de plurinacionalidad y reconocimiento de las lenguas indígenas los preceptos discursivos que primaron en la agenda de actoras sociales como Nina Pacari y Blanca Chancoso, las cuales demostraron tener una capacidad organizativa y de movilización muy relevante, mediante la cual se buscó cuestionar problemas sociales enraizados profundamente en las estructuras sociales y políticas ecuatorianas, como la idea de nación y la aceptación de identidades diversas en la sociedad.

Fecha de recepción: 18/09/20

Aceptado para publicación: 05/03/21

Referencias Bibliográficas

- Achig, Lucas, “La ‘Reconstrucción Nacional y el Movimiento Obrero Ecuatoriano: Ensayo de la coyuntura para la elaboración de la Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano”, *Revista IDIS*, Cuenca, n.16, 1986.
- Barrera, Augusto, *Acción colectiva y crisis política, el movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa*, CEDIME, Quito, 2001.
- Becker, Marc, *¡Pachakutik! Movimientos indígenas, proyectos políticos y disputas electorales en el Ecuador*, FLACSO-Ecuador y Abya-Yala Ediciones, Quito, 2015.
- Banco Central del Ecuador, *Cartas de Intención suscritas por el gobierno del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional*, Banco Central del Ecuador, Quito, 1983.
- Carvajal, Fernando, “Ecuador: la evolución de su economía”, en Luna Tamayo, Milton y Bonilla, Adrián, eds., *Estado del País, Informe Cero, Ecuador 1950-2010*, Estado del País, Quito, 2010.
- Consejo Nacional de Desarrollo, *Plan Nacional de Desarrollo del gobierno democrático, 1980-1984*, CONADE, Quito, 1980.
- Consejo Nacional de Desarrollo, *Informe del presidente del Consejo Nacional de Desarrollo al H. Congreso Nacional*, CONADE, Quito, 1985.
- Consejo Nacional de Desarrollo, *Informe del presidente del Consejo Nacional de Desarrollo al H. Congreso Nacional*, CONADE, Quito, 1986.
- Consejo Nacional de Desarrollo, *Informe del presidente del Consejo Nacional de Desarrollo al H. Congreso Nacional*, CONADE, Quito, 1988.
- Córdova Vianelo, Lorenzo, “Liberalismo, Democracia, Neoliberalismo, ingobernabilidad” *Revista Mexicana de Sociología*, México D.F, n.4, vol. 58, 1999.
- Díaz-Polanco, Héctor, *Etnia, nación y política*, Juan Pablos Editor, México, 1987.
- Espinosa, Leonardo, “Ensayo preliminar sobre el imperialismo, oligarquismo y sindicalismo para la elaboración de la historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano”, *Revista IDIS*, Cuenca, n.16, 1986.
- Fraser, Nancy, “La justicia social en la era de la política de identidad: Redistribución, reconocimiento y participación”, en Fraser, Nancy y Honneth, Alex, eds., *¿Redistribución o reconocimiento?*, Ediciones Morata, S.L, Madrid, 2006.
- García Pascual, Francisco, “¿De la década perdida a la otra década perdida? El impacto del ajuste estructural en el Ecuador y en América Latina, 1980-2002” en Francisco García y Víctor Bretón *Estado eds.*, *Etnicidad y movimientos sociales en América Latina*, Icaria Editorial, Barcelona, 2003.
- Loor Dávila, Jorge, *El FUT, trayectoria y perspectivas*, Corporación Editora Nacional, Quito, 1995.

Pérez Sáinz, Juan Pablo, *Mercados y bárbaros, la persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina*, FLACSO, Costa Rica, 2014.

Rodas, Raquel, *Dolores Cacuango, pionera en la lucha por los derechos indígenas*, Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas, Quito, 2007.

Roldós, Jaime, “Mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano” en Saad H, Pedro, ed., *25 años de democracia en Ecuador*, Editorial EL CONEJO, Quito, 2005.

Ycaza, Patricio, *Historia del Movimiento Obrero ecuatoriano*, CEDIME, Quito, 1991.